

Libros

La ley de los espías

FABIAN BOSOR

Asi como para el liberalismo económico, el mejor Estado es aquel que se retira y deja hacer todo cuanto sea posible a la actividad privada, ha ocurrido algo parecido entre el pensamiento democrático y los servicios de inteligencia estatales. Consecuencia de este equivoco, entendible en parte como reacción a tantas y tan prolongadas tropelías de autoritarismo inquisitorial, espionaje ideológico y campañas de acción psicológica, ha sido la dificultad en poner a la inteligencia estatal verdaderamente al servicio de la sociedad.

Entre la idea de que lo mejor que se podía hacer con los servicios era desmantelarlos y la contracara de pensar que bastaba con controlarlos bien y dejar de dar órdenes aberrantes, se han pagado precios altos por tantas omisiones.



En diecisiete años de democracia hubo avances en la depuración de estos núcleos oscuros de la administración estatal. También en los marcos legales y aspectos jurídicos, formativos y profesionales en algunas áreas de dichos organismos. Pero no se produjo, más allá de propósitos enunciados, una redefinición operativa de la inteligencia de Estado a la altura de nuevas realidades y amenazas derivadas de la internacionalización, la desestatización de las economías nacionales, las dinámicas de competencia comercial o las innovaciones tecnológicas y sus posibles aplicaciones.

El trabajo realizado por José Manuel Ugarte, **Legislación de inteligencia: especialización y control, legitimidad y eficacia** (Dunken), es una importante contribución para quienes busquen cubrir estos vacíos, repensar la cuestión y tomar a este viejo toro por las astas. Se trata de un minucioso análisis sobre la legislación de los Esta-



DANIEL CACERES

CAMBIO DE FOCO. Los militares tienen prohibido hacer inteligencia interna.

dos y sobre el funcionamiento de sus sistemas de inteligencia. En el libro se comparan ejemplos de estructuras de inteligencia de regímenes dictatoriales con aquellas propias de países con una vigencia democrática más arraigada, entre los que se encuentran los que poseen los sistemas más eficaces y menos corrompibles. Dentro de estos últimos, se analizan los cambios producidos por el fin de la Guerra Fría y la reorientación de sus actividades. También se estudian los efectos que ha tenido la transición a la democracia en los servicios de inteligencia de los estados latinoamericanos y se aporta material sustantivo para entender por dentro estos circuitos del poder.

En el caso de nuestro país, cabe recordar el consenso parlamentario poco usual logrado en la aprobación de las leyes de Defensa y Seguridad Interior, de Servicio Militar Voluntario y de reestructuración de las Fuerzas Armadas. Detrás de la escena pública, Ugarte ha sido un protagonista, como asesor y co-redactor de estas leyes, lo cual le da a este libro el valor de la experiencia personal. Los compromisos pen-

dientes o incumplidos incluyen la coordinación de las múltiples agencias de inteligencia estatal, que suman más de veinte entre las nacionales, provinciales, de las fuerzas armadas y policiales, un control parlamentario más minucioso por parte de la comisión bicameral que se formó a tal fin y la neutralización de los resabios de la vieja mentalidad, todavía presentes.

El libro ayuda a entender por qué un cambio profundo en la concepción de la inteligencia de Estado no debe ceñirse a su racionalización administrativa o al ajuste de personal.

El país precisa un organismo de inteligencia estatal moderno, funcional y eficiente que esté en condiciones de dotar a los gobiernos de información calificada, análisis estratégico, buenos diagnósticos sobre la realidad regional e internacional para tomar mejores decisiones. Los países que se insertan mejor en el mundo son los que logran combinar el interés nacional, las garantías individuales y la seguridad jurídica. Ello requiere un Estado con capacidad de inteligencia propia y al servicio de los ciudadanos. □

Aquel octubre

FRANCO CASTIGLIONI

El Divorcio (Ateneo) es original en la producción del brillante periodista Martín Granovsky porque el caso político que quiere entender junto a sus lectores es de tal complejidad que, entre otras derivaciones, repercute también sobre sus opciones narrativas. El autor encara la renuncia del vicepresidente



Carlos Chacho Álvarez en un proceso, que inicia diez meses antes en un hotel céntrico donde el Presidente electo Fernando De la Rúa diseñaba el primer gobierno de coalición, y culmina en otro hotel donde Álvarez anuncia, el 6 de octubre, que deja el gobierno. Es un libro denso de significados que abarcan pasiones, miserias, incertidumbres, de hechos ocurridos apenas anteayer. Granovsky pone en evidencia, no sin un toque de ironía, problemas que ahora podemos conjeturar acerca de su posible incidencia en las decisiones y no decisiones de la coalición. El libro sugiere que desatada la crisis del Senado el despliegue de iniciativas y gestos de Álvarez no tuvieron éxito por no encontrar aliados disponibles para emprender los cambios que en aquel momento parecían tan imposibles y necesarios. Granovsky revela e interpreta cómo jugaron contra tales alianzas las percepciones y malos entendidos acerca de las razones de cada actor, la extraordinaria ligereza con que los diagnósticos se contruyeron a partir de actitudes, creencias y palabras escritas por otros; Granovsky otorga centralidad a la falta de diálogo en una coalición, y peor aún, las sospechas que conspiraron para que los sectores del llamado progresismo formularan una estrategia que distinguiera el campo entre renovadores y conservadores, ambos presentes en todos los partidos. ¿Por qué se desarrolló de esta manera, si la experiencia de diálogo tenía el antecedente del Molino, el encuentro transversal hacia fórmulas más amplias, no testimoniales y si renovadoras? Granovsky detiene la narración en las operaciones conspirativas y torpes de las que fuera blanco el vicepresidente, reparando también en el déficit organizativo y el desconocimiento del aparato estatal de la dirección frepasiista. El libro puede tener distintas lecturas: posiblemente una parte del gobierno, la más cercana al Presidente proteste que su posición no tenga la centralidad narrativa y perceptiva que se le asigna a Álvarez. Para el lector medio Álvarez es el personaje que oxigenó al sistema y llegó, algo inédito, a no otorgar manto de olvido al Senado. Para el lector politizado, **El Divorcio** repite hechos conocidos pero ofrece perfiles que el autor considera ineludibles. Los politólogos, historiadores, periodistas tendrán la primera interpretación que agudamente planteó los vetos a que dan lugar la falta de diálogo, la desconfianza, el malentendido; a la cual consultar cuando se analice esta primera experiencia de presidencialismo constitucional y gobierno de coalición.

A VUELTA DE CORREO

Massera, el comandante insolvente

El domingo pasado se publicó una carta del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, referida a mi nota periodística del 7 de enero de 2001 en este suplemento. Becerra admite haber sido designado defensor de Manuel Campoy—vinculado a Massera en causas sobre la apropiación de bienes de varias personas desaparecidas—pero aclara que no aceptó tal defensa. Conviene subrayar que la nominación de Becerra como defensor de Campoy—responsabilidad que compartía con otro abogado, Carlos Alfredo García—quedó asentada en el sumario judicial aludido el 29 de diciembre de 1983. Se lo constata en las fojas 744 y 870, de la causa 1580/2 radicada en el juzgado del Dr. Jorge Garguir, quien debía investigar la apropiación indebida de inmuebles en

Mendoza que pertenecieran a personas secuestradas y aun desaparecidas en la ESMA y tierras por un valor actual de alrededor de 20 millones de dólares. En uso de tales facultades, Nicolás Becerra recusó al fiscal de esa causa, Carlos Fuego, quien así lo confirmó en el diario **Página 12**, el 6 y 7 de febrero de 1998. Fuego refuta el argumento de que Becerra no aceptó ser el defensor de Campoy y que no realizó actuaciones en ese sumario. Cabe agregar que el juez instructor Garguir—que no sancionó el expolio denunciado—fue cesanteado por la democracia a raíz de su desempeño durante la dictadura, pasando a integrar de inmediato el estudio del Dr. Becerra en Mendoza. Si bien con el correr del tiempo Becerra se apartó de la defensa de Campoy, dejó a su colega García continuar con la labor. García se abocó también

a defender al escribano Jorge Maglie, quien participó—según pruebas judiciales—en el montaje de documentación falsa para saquear las propiedades de los desaparecidos de la ESMA en ese mismo caso. Al transferirse más tarde la causa de Mendoza a Buenos Aires, fue nombrado defensor de los acusados el Dr. Luis Salassa, tío del antes citado Garguir y socio de Becerra. Interrogado acerca de quién lo había contratado para ejercer esa defensa en la Capital Federal, el Dr. Salassa no supo explicarlo al juez. Los doctores Becerra, Garguir y García, aparecen a su vez relacionados en indagaciones judiciales por las irregularidades en la obtención de la ciudadanía argentina de Monzer Al Kassar, y en la organización de la defensa del banquero Raúl Moneta.

JUAN GASPARINI